

Santiago, dos de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el recurso de nulidad que interpuso la demandada en contra de la que hizo lugar a la demanda subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones, y en su lugar, la rechazó.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, de su artículo 483-A, se desprende que esta Corte debe controlar en la admisibilidad, su oportunidad, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a que se ha hecho referencia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del arbitrio.

Tercero: Que, según se expresa en el recurso, la materia de derecho que se propone para efectos de su unificación consiste en determinar *“la calificación de exclusiva confianza del empleador, ocupado en el inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo, pues dicha disposición no contiene una definición o descripción de qué debe entenderse por tal, será el sentenciador quien, caso a caso, deberá determinar si cierto trabajador se ubica o no dentro de esa categoría bajo los principios de protección y primacía de la realidad en concordancia a la prueba rendida en autos”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, en primer lugar, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en los autos Rol N° 33-2019, en que se estableció que el demandante no estaba dotado en los hechos de facultades generales de administración, dado que no tenía facultades que permitan comprometer directamente los intereses de la empresa, ni contaba con poderes de representación, por lo que no se encontraba en la hipótesis del artículo 161 inciso segundo del Código del Trabajo.



Y, en segundo lugar, se acompañó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Serena, en el Rol N° 1-2021, en que se determinó que el cargo de director regional de administración y finanzas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias corresponde a uno directivo de nivel regional, con facultades para operar la cuenta corriente y realizar actos de administración, planificación y ejecución de políticas, razones por las que contaba con poder de administración, lo que se corresponde con un cargo de exclusiva confianza.

Quinto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada. Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que, a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con la que sustentan los fallos de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, estableció que el demandante, que se desempeñaba como agente de sucursal, contaba con el manejo del presupuesto anual, tenía autorización para efectuar gastos, representar al banco ante las instituciones, empresas u organizaciones públicas y privadas correspondientes a su plaza, tenía poderes de representación y facultades de administración que le permitían contratar y comprometer fondos significativos. Sin embargo, los pronunciamientos contenidos en las sentencias que fueron acompañadas se sustentan en situaciones fácticas y razonamientos diversos, la primera, en cuanto estableció que el demandante no estaba dotado de facultades generales de administración, ni contaba con poderes de representación, que permitieran comprometer directamente los intereses de la empresa y, la segunda, desde que determinó que el director regional de administración y finanzas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, corresponde a uno directivo de nivel regional, con facultades para operar la cuenta corriente y realizar actos de administración, planificación y ejecución de políticas, por lo que se trata de un cargo de exclusiva confianza.



Séptimo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia cinco de diciembre de dos mil veintidós.

Regístrese y devuélvase.

Nº 170.453-2022.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Diego Gonzalo Simpertigue L., Ministro Suplente Juan Manuel Muñoz P. y los Abogados (as) Integrantes Ricardo Alfredo Abuaud D., Carolina Andrea Coppo D. Santiago, dos de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dos de mayo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

